

## RESUMEN DE LOS INFORMES SOBRE HAITÍ, SIERRA LEONA Y REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Cientos de miles de personas mueren cada año por la proliferación descontrolada de armas ligeras en países en conflicto o en países que están retornando a una situación de paz. En ellos, varios millones de personas más resultan heridas, mutiladas, violadas o ven arruinadas sus vidas por culpa de las armas.

Lo que las cifras no reflejan es el sufrimiento de las personas, familias y comunidades afectadas por estos conflictos. Por ello, en noviembre de 2005 la campaña *Armas Bajo Control* entrevistó a víctimas de este sufrimiento. A partir de enero de 2006, Naciones Unidas iniciará una ronda de debates sobre desarme. Habrá discusiones técnicas y negociaciones diplomáticas. El objetivo de este informe es el de añadir a estos debates las voces de personas que sufren el coste del estrepitoso fracaso mundial en el control del comercio de armas.

A pesar del sufrimiento y la pobreza alimentadas por las transferencias de armas, no hay todavía un tratado internacional exhaustivo, legalmente vinculante, que regule el comercio de armas convencionales. Un nuevo Tratado Internacional sobre Comercio de Armas (TCA), basado en los principios de las leyes internacionales, crearía unos estándares mínimos globales para las transferencias de armas, previniendo aquellas transferencias que puedan ser usadas para cometer violaciones de los derechos humanos u obstaculizar el desarrollo de los países. Esto reduciría el coste humano de las transferencias irresponsables de armas y serviría para evitar que los vendedores de armas sin escrúpulos encuentren y usen los puntos débiles en la cadena de suministro.

No podemos seguir ignorando la grave proliferación de armas convencionales. Aquellos Estados responsables que son exportadores de armas y los Estados afectados por este comercio no deben ser rehenes de los pocos países que quieren impedir el progreso en este campo. En 2006 deben conseguir iniciar las negociaciones del Tratado sobre el Comercio de Armas.

### HAITÍ

“Cuando hay armas por medio, hay más víctimas. Antes eran los *macoutes* (paramilitares liderados por los ex dictadores Francois y Jean Claude Duvalier) y los ex soldados los que tenían armas. Ahora, es la gente que vive en tu propio barrio quien comete los actos de violencia”.

Malya, una mujer de Martissant, un suburbio de Puerto Príncipe, en noviembre de 2005.

La violencia armada continúa haciendo estragos en la vida de muchas personas en Puerto Príncipe, capital de Haití, a pesar de la presencia de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas para Haití (MINUSTAH). La MINUSTAH se desplegó en el país en junio de 2004 para, entre otras misiones, apoyar al gobierno provisional en las tareas de garantizar la seguridad y la estabilidad, para ayudarle en la reforma de la Policía haitiana, y para proteger y promover los derechos humanos y el imperio de la ley<sup>1</sup>. Grupos armados de las zonas pobres de la ciudad –

<sup>1</sup> Resolución 1542, de 30 de abril de 2004, del Consejo de Seguridad de NNUU.

algunos de ellos leales al ex presidente Aristide y otros leales a facciones políticas rivales–, y bandas criminales luchan con la Policía Nacional (PN) haitiana y con las fuerzas de Naciones Unidas, y se enfrentan entre ellas.

Sólo en un centro médico de Puerto Príncipe, unas 1.400 personas fueron ingresadas por herida de arma de fuego entre diciembre de 2004 y octubre de 2005. “*Todavía estamos recibiendo tres víctimas por arma de fuego cada día. Y hay otras muchas que van al hospital general universitario, o que son asesinadas*”, explica Ali Besnaci, jefe de misión de Médicos Sin Fronteras. “*Esto es como una guerra. Hay siempre enfrentamientos entre las bandas y las fuerzas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, la MINUSTAH*”, añade. Muchas de las víctimas, si no la mayoría, han sido civiles inocentes.

Las organizaciones de derechos humanos han documentado asesinatos y secuestros cometidos por muchos de esos grupos armados, ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por la Policía Nacional haitiana, y muertes que son resultado de supuestos disparos indiscriminados por parte de soldados de NNUU. Los incidentes concretos descritos en este documento están basados en entrevistas realizadas en Haití en noviembre de 2005, y en artículos basados en entrevistas con grupos de derechos humanos haitianos realizadas en 2005<sup>2</sup>: También se cree que el número de violaciones que ocurren en Puerto Príncipe está directamente vinculado a la proliferación de armas.

La campaña *Armas bajo Control* realizó varias entrevistas en Haití en noviembre de 2005 y reproduce en este documento las voces de personas que soportan el coste del fracaso continuo de la comunidad internacional en el control del comercio de armas.

La violencia armada en Haití no es algo nuevo. Después de años de dictadura de la familia Duvalier, en 1990 Jean-Bertrand Aristide se convirtió en el primer presidente de Haití elegido democráticamente. A los pocos meses, huyó a Estados Unidos después de haber sido derrocado por un golpe de estado. Unas 3.000 personas fueron asesinadas durante la dictadura militar que siguió al golpe de estado, y que duró hasta 1994. Después de que fuera restituido en una operación militar estadounidense, hubo acusaciones de que Aristide estaba apoyando a bandas armadas de las zonas pobres para sus propios fines políticos. En febrero de 2004, Aristide se vio forzado a abandonar Haití en medio de una revuelta armada protagonizada por bandas que antes le apoyaban y por soldados desmovilizados.

El gobierno provisional hasta ahora en el poder carece de un compromiso político fuerte para poner en marcha un desarme exhaustivo y un programa de desmovilización e integración que tenga como objetivo todas las comunidades, individuos y grupos armados ilegales. Mientras tanto, la proliferación de armas pequeñas sigue costando la vida a muchos hombres, mujeres y niños inocentes. El desarrollo del país también se ve entorpecido por la violencia generada por la presencia y la proliferación de las armas.

Los actuales proyectos de “reducción de la violencia” –que buscan garantizar que la policía se ciñe a las normativas internacionales de derechos humanos y a estándares establecidos por Naciones Unidas para el uso de las armas de fuego– son un comienzo, pero no son suficientes a la hora de hacer frente a muchas de las preocupaciones bien arraigadas que tiene la población respecto a los asesinatos ilegales que han podido ser cometidos por la policía haitiana.

Fuera de Puerto Príncipe, Haití ha vivido una paz relativa desde la primavera de 2005, cuando las fuerzas de Naciones Unidas eliminaron las bases de los ex militares armados que habían controlado varias de las ciudades más importantes así como extensas áreas en el interior del país.

<sup>2</sup> ‘*Civilians caught in UN-gang crossfire*’ (“Civiles atrapados en fuego cruzado entre NNUU y bandas armadas”), de Reed Lindsay, *The Toronto Star*, 1 de mayo de 2005; y ‘*OAS urged to rein in police, peacekeepers*’ (“Piden a la OEA que refrene a la policía y a las fuerzas de NNUU”), Jim Lobe, *Inter-Press Service*, 16 de noviembre de 2005.

El personal militar de Naciones Unidas también ha logrado establecer una presencia permanente en algunas áreas pobres de Puerto Príncipe, trayendo un cierto grado de tranquilidad. Pero más allá de esta situación, la ley de las armas sigue dominando la capital, no solo provocando muertes y heridos entre las personas más pobres, sino destrozando sus vidas.

Haití no produce armas de fuego, a excepción de las rudimentarias armas caseras *creole* (criollas), que normalmente son pistolas bastante toscas o rifles hechos a partir de otros viejos. La mayor parte de las armas son introducidas ilegalmente en Haití desde países vecinos, incluido EEUU. En la última década, varios países, entre ellos Brasil, Francia, Italia, el Reino Unido y EEUU, han emitido licencias para la transferencia de armas a Haití, según los datos de aduanas recogidos en la base de datos de comercio de mercancías de Naciones Unidas.

Desde 1980, EEUU ha sido el mayor proveedor de armas de Haití. Sin embargo, después del golpe de estado militar de 1991 el gobierno de EEUU impuso un embargo de armas a Haití que permitía hacer algunas excepciones para la autorización de transferencias de algunas armas estadounidenses tras analizar "caso por caso". Desde el nombramiento de Gerard Latourte como primer ministro en 2004, se han producido algunas de esas transferencias, incluyendo el suministro en 2004 de 2.600 armas a la Policía Nacional, implicada en violaciones de los derechos humanos. En 2005 se aprobó una venta adicional de pistolas, rifles y gases lacrimógenos a la Policía Nacional por valor de 1,9 millones de dólares<sup>3</sup>.

El 8 de enero de 2006 se celebran las primeras elecciones en Haití desde que el presidente Aristide fuera desalojado del poder en febrero de 2004. Dadas las frágiles condiciones de seguridad y la tensión política que se vive en Haití es probable que estas elecciones estén acompañadas de incidentes armados violentos.

Los gobiernos de otros países deben actuar para detener el flujo de armas desde América Latina, EEUU y otras regiones. El resto del mundo debe asumir la responsabilidad de las armas que suministra. Todavía no hay un tratado internacional vinculante y exhaustivo que regule el comercio de armas convencionales a pesar de que las transferencias internacionales de armas siguen alimentando el sufrimiento y la pobreza.

## REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

*"Aquí hay tantas armas que cada persona aplica su propia ley. La impunidad es prácticamente total. Cualquiera que tenga un arma tiene autoridad sobre cualquier persona y puede amenazar a quien quiera".*

Jean-Charles, cooperante en la República Democrática del Congo desde 2001, Bukavu, Kivu Sur)

La guerra en el este de la República Democrática del Congo (RDC) ha costado millones de vidas. Cientos de miles de personas han muerto a tiros, y millones de personas más han muerto por consecuencias indirectas de la guerra.

---

<sup>3</sup> *Securing Haiti's Transition: Reviewing Human Insecurity and the Prospects for Disarmament, Demobilisation, and Reintegration*, Robert Muggah, Small Arms Survey, Graduate Institute of International Studies, Ginebra, octubre de 2005, p 12.

Este informe contiene historias que revelan el coste humano que ha tenido en la RDC el comercio de armas en los últimos años, incluyendo efectos tan recientes como la matanza brutal que tuvo lugar el pasado 12 de noviembre. Son testimonios como el del trauma de Beatrice y Claire<sup>4</sup> tras haber sido testigos del asesinato de sus padres, la experiencia de Benjamin como niño soldado, incapaz ahora de soportar el ruido de los disparos, y la situación de Nathalie, que, afectada por varias heridas de bala, se enfrenta a un futuro incierto.

Sus casos no son excepciones. Sólo entre enero de 2003 y abril de 2004, casi 400.000 personas murieron en el este de la RDC, donde los combates continúan<sup>5</sup>. Desde 1998, un 85% de las personas que viven o vivían cerca de las líneas de frente se han visto afectadas por la violencia<sup>6</sup>. Los cuatro testimonios recogidos en este informe ofrecen una fugaz mirada en el destino de cientos de miles de civiles congoleños cuyas vidas han sido devastadas por las transferencias de armas.

Pero hay también otra historia: la de los países que permiten el continuo suministro de armas a la RDC. Este informe expone también cómo las armas han llegado hasta allí, y por qué han conseguido entrar en el país con tanta facilidad.

La creación de un nuevo Ejército nacional, y los esfuerzos para conseguir el desarme y la desmovilización de los excombatientes son parte de la solución a lo que ocurre en la RDC. Pero sin una acción internacional más concertada, el fin del sufrimiento de los congoleños –y el fin del suministro de armas ligeras y munición usadas para infligirlo– seguirá estando muy lejos. Las transferencias de armas siguen alimentando las atrocidades que se cometen en la RDC. Como en las demás crisis que asolan el planeta, el resto del mundo debe asumir la responsabilidad de las armas que suministran. Para ello, los gobiernos deben adoptar un nuevo Tratado Internacional sobre Comercio de Armas (TCA).

## SIERRA LEONA

*“Antes de la guerra teníamos luz y agua corriente, pero ahora por culpa de las armas no tenemos nada. Ahora tenemos que utilizar lámparas de queroseno y tenemos que ir a buscar agua. Teníamos bibliotecas en las escuelas y ahora esos edificios están vacíos”.*  
Zainab Kamara, concejal de Makeni, distrito de Bombali.

La reciente película de Hollywood *Lord of War* presenta a un comerciante de armas al que no le importa quién compre sus armas mientras pague. Adquiere armas y munición en Europa del Este y las vende en zonas de conflicto en África, incluidos países como Sierra Leona y Liberia. Usa documentación falsa y explota cualquier agujero en las leyes para hacer sus transacciones. Los guionistas de esta película no han inventado nada. El personaje puede ser ficticio, pero sus actividades y métodos están basados en los de los comerciantes reales que suministraban armas a los rebeldes en Sierra Leona a lo largo de una guerra brutal que terminó en 2002. En lo que se queda corto el filme es en mostrar el coste humano de este comercio de armas.

<sup>4</sup> Para proteger la identidad de los testigos, se han cambiado todos los nombres.

<sup>5</sup> IRC (International Rescue Committee), ‘Mortality in the Democratic Republic of the Congo,’ Diciembre 2004. El 77% del exceso de mortalidad de 500.000 personas fue en el este de la RDC.

<sup>6</sup> Senado Belga, ‘Informe sobre la Explotación de las Riquezas de la RD del Congo’, Febrero 2003.

El conflicto en Sierra Leona empezó en marzo de 1991 cuando un pequeño grupo de rebeldes del Frente Revolucionario Unido (RUF, en sus siglas en inglés) cruzó la frontera desde Liberia y empezó a atacar a la población civil. Cuando se declaró el final de la guerra, los muertos se contaban por decenas de miles en un país con apenas cinco millones de habitantes. Miles de personas habían sido mutiladas o violadas y se estima que 10.000 menores de edad habían sido secuestrados para convertirlos en niños soldado. Cerca de dos tercios de la población tuvieron que huir de sus hogares para establecerse en otras partes del país, y 600.000 personas tuvieron que refugiarse en otros Estados.

Con todo, estas cifras no reflejan la magnitud de lo que perdió la población civil en este conflicto. El comercio de armas tiene un impacto en la vida de personas de carne y hueso. En este documento se presentan historias que Hollywood nunca mostrará.

Las raíces profundas de los once años de guerra en Sierra Leona se remontan a décadas de gobiernos corruptos, alienación de la juventud y destrucción de instituciones básicas como el Parlamento, la Policía y el funcionariado. El descontento trajo consigo cierto apoyo popular a los rebeldes en los primeros años de la guerra. La falta de un control adecuado de las Fuerzas Armadas por parte del gobierno permitió que se produjeran golpes de estado y facilitó que los soldados gubernamentales cambiaran de bando. Otra gran fuente de alimentación del conflicto fue el apoyo que los rebeldes del RUF recibieron del presidente de Liberia, Charles Taylor, que no ocultaba sus ambiciones de poder en África Occidental.

Sin embargo, hay un factor que superó a todos los demás en su contribución a la violencia: el continuo suministro de armas, muchas de ellas pagadas con la venta ilegal de diamantes. Sierra leona no fabrica armas. El mundo exterior tenía que suministrárselas, y así lo hizo.

Todas las partes en el conflicto cometieron crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otras violaciones de las leyes humanitarias internacionales y los derechos humanos<sup>7</sup>: los rebeldes del RUF, que fueron responsables de violaciones de esas normas durante la guerra; el Consejo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (AFRC, en sus siglas en inglés), que tomaron el poder cuando oficiales del Ejército derrocaron al gobierno electo en un golpe de estado militar en 1997; las tropas gubernamentales; y las milicias pro gubernamentales de la Fuerza de Defensa Civil, que tenían sus bases en las sociedades de cazadores de tribus locales.

Además, los soldados nigerianos del ECOMOG (fuerzas de mantenimiento de la paz de la Comisión Económica de los Estados de África Occidental), que devolvieron al poder al presidente Kabbah en 1998 antes de la llegada de los cascos azules de NNUU, no tomaron las medidas adecuadas para minimizar los riesgos del conflicto para los civiles<sup>8</sup>.

Durante todo este tiempo, tanto los gobiernos que han suministrado armas a Sierra Leona como los países a través de los cuales ha transcurrido ese comercio, no detuvieron el flujo de armas y municiones a los rebeldes. Mayor aún es el fracaso global de la comunidad internacional, que aún después de ser testigo de estas atrocidades y otras ocurridas en conflictos similares, no ha adoptado las medidas necesarias para controlar el comercio internacional de armas. Para asumir la responsabilidad de las armas que suministran, los gobiernos deben acordar un nuevo Tratado sobre Comercio de Armas.

<sup>7</sup> Nota de prensa de Amnistía Internacional, "Sierra Leona: el Tribunal Especial rechaza la amnistía para los peores crímenes que la humanidad ha conocido", 28 de marzo de 2004, (AI Index: AFR/51/007/2004).

<sup>8</sup> Amnistía Internacional, *Sierra Leona: 1998: un año de atrocidades contra civiles*, 1 de noviembre de 1998 (AI Index: 51/022/1998).



## 2006, UN AÑO CRUCIAL

El año 2006 ofrece una oportunidad política única para poner en marcha ese Tratado:

- La Conferencia de Revisión del Programa de Acción de Naciones Unidas sobre Armas Ligeras, que se celebra en junio o julio de 2006, debe acordar unos principios claros para la transferencia internacional de esas armas, basados en las normas internacionales existentes, para prevenir que caigan en manos equivocadas.
- El Comité Preparatorio de la Conferencia, que se celebra este mes de enero de Nueva York, debe preparar la agenda y los debates sobre el Tratado.
- El Primer Comité de la Asamblea General de NNUU, que se reúne en octubre de 2006, debe, por último, iniciar el proceso de negociación del Tratado sobre el Comercio de Armas.

La proliferación de armas convencionales es demasiado grave para que se siga ignorando. Los exportadores de armas responsables y los Estados afectados por el descontrol en el comercio de armas no deben ser subyugados por los pocos países que quieren impedir el progreso. En 2006, deben empezar las negociaciones del Tratado sobre el Comercio de Armas.

FIN